



BOLETÍN ECLESIAÍSTICO

DEL

Obispado de Astorga.

SUMARIO.—Salida de S. E. I. á la Sta. Pastoral Visita del Arciprestazgo de Somoza.—Circular sobre ejercicios espirituales para el Clero.—Real Decreto acerca de la nulidad de la venta de la huerta y pajar rectorales de Robledo de Valduerna.—Real orden sobre jubilaciones de párrocos.—Apéndice á la anterior R. O.—Sobre el Congreso Católico Nacional.—Conclusiones acordadas por el mismo.—Síntesis instructiva sobre lo que deben practicar los párrocos en el caso de recibir la Sta. Visita Pastoral.—Movimiento religioso de la Diócesis.

En el día 27 del pasado mes, á las 5 de la tarde, salió nuestro Excmo. é Ilmo. señor Obispo á la Santa Visita del arciprestazgo de Somoza, dirigiéndose á la primera mansión, establecida en Valdespino.

Durante su ausencia, quedó encargado del gobierno de la Diócesis el M. I. Sr. Don Antonio Forcadas y Soler, Provisor y Vicario general del Obispado.

OBISPADO DE ASTORGA.

Circular.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA EL CLERO.

Deseando en este año continuar la práctica saludable de proporcionar al respetable Clero de esta Diócesis algunos días de retiro espiritual, á fin de que su caridad se inflame mas y más en el amor de Dios y en el del prójimo, hemos creído conveniente disponer que haya dos tandas de ejercicios espirituales en el Seminario Conciliar de este Obispado, empezando la 1.^a en la noche del 4 del mes de Julio, y la 2.^a en la del 29 de Agosto.

A dichos ejercicios concurrirán en primer lugar los que en los años anteriores no les hubiesen practicado, viniendo, cuando menos, tres eclesiásticos de cada arciprestazgo.

Los Sres. arciprestes adoptarán las medidas que estimen oportunas, para que llegue á conocimiento del Clero de su distrito esta Circular, pasando después, con anticipación, una relación de los asistentes á cada una de las dos tandas, á la Secretaría de Cámara y Gobierno.

Al efecto autorizamos á los Sres. Sacerdotes á quienes se les encarguen las parroquias ó coadjutorías, para decir segunda misa, cuando sea necesario, guardando, lo prescrito en los sagrados cánones.

Astorga 27 de Mayo de 1889.

✠ *JUAN, Obispo de Astorga.*

REAL DECRETO.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución REY de España, y en su nombre y durante su menor edad la REINA Regente del Reino;

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quie-

nes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito contencioso-administrativo que, en única instancia, pende ante el Consejo de Estado entre D. Niceto Juan y Centeno, representado por el Licenciado D. Manuel García Prieto, y la Administración general, y en su nombre Mi Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de la Real Orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 3 de Agosto de 1883, relativa á excepción de venta de un huerto y pajar pertenecientes á la casa Rectoral de Robledo de Valduerna, en la provincia de León.

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del que aparece:

Que anunciados en venta por el Estado en 20 de Junio de 1874, como procedentes de la fábrica de la iglesia de Robledo de Valduerna, unos prados y una huerta, fueron adjudicados mediante subasta, en 8 de Febrero de 1875, á D. Luís Moreno, que por falta de pago fué declarado en quiebra en 21 de Febrero de 1877, anunciándose nueva subasta de los mismos bienes en 31 de Marzo siguiente:

Que en 14 de Abril del mismo año D. Felipe Pascual, apoderado del párroco de Robledo D. Niceto Juan, acudió al Administrador económico de León pidiendo la suspensión de la anunciada subasta, pretensión que fué denegada, lo mismo que la dirigida á la propia Autoridad por el Alcalde pedáneo y vecinos de Robledo, solicitando también la suspensión de la subasta, que se verificó en 30 de Abril, adjudicando las fincas á D. Matías Casado por órden de 4 de Agosto del mismo año:

Que en 25 de Septiembre de 1878 D. Niceto Juan Centeno acudió á la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado pidiendo la nulidad de la venta de la huerta y pajar pertenecientes á la Rectoral de Robledo, verificada en 30 de Abril del año anterior, reponiéndole en la posesión de dichas fincas, y fundaba esta petición en que los bienes vendidos formaban parte de la huerta rectoral por haber sido adquiridos por el Párroco, mediante permuta de otras fincas, en 1781, y que en este concepto de propios habían sido poseídos siempre, por lo que, se hallan comprendidos en las excepciones marcadas por la ley de 4 de Abril de 1860, y Real Decreto de 4 de Enero de 1867, figurando además en la relación de bienes exceptuados de la venta en la diócesis de Astorga, como lo acreditaba mediante certificación del Secretario de Cámara y gobierno del Reverendo Obispo de dicha diócesis, constando así además en el cuaderno de la Sección de propiedades de la Administración Económica de la provincia:

Que tramitado este expediente se hizo constar en él, por medio de amplio informe del Alcalde del Término á que corresponde la iglesia de Robledo, que la huerta y pajar vendidos habían venido figurando de antiguo como pertenecientes á la casa rectoral, teniendo ésta puertas y ventanas á la huerta y una escalera que comunicaba la casa con la huerta, escalera que fué derribada para mayor seguridad de la casa en 1854, por haberse intentado robar la casa por dicho punto, y remitidas estas diligencias á la Dirección, este centro acordó ampliarlas para acreditar si se había solicitado ó no la excepción de estas fincas en el plazo de dos meses, que señala la circular de 19 de Enero de 1867, y caso negativo, que manifestase el Párroco las causas por las que no se había pedido la excepción de la venta:

Que el Párroco de Robledo, en oficio de 17 de Agosto de 1879, manifestó que la excepción de la huerta y pajar debió ser declarada en tiempo y forma, puesto que estaban incluidas como fincas exceptuadas en los inventarios de la diócesis; que no tenía ninguna noticia de las gestiones que pudieron hacerse por virtud de la circular de 1867, porque hasta el año 75 no se había encargado de la parroquia; que nadie le había molestado en la posesión de las fincas; que aunque su antecesor se hubiera descuidado en hacer la reclamación, su derecho era legalmente incuestionable, y que cuando las fincas se habían sacado á subasta se formuló la correspondiente protesta, y la Administración Económica de León hizo constar, que, aparte de la relación de fincas exceptuadas, no consta ninguna reclamación respecto á las de que se trata;

Que en vista de estos antecedentes la Dirección, por orden de 18 de Febrero de 1880, acordó desestimar la reclamación de Don Niceto Juan y Centeno, pidiendo que se anule la venta de la finca núm. 8.395 del inventario del clero:

Que contra este acuerdo interpuso el interesado recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda, y oído el dictamen de la dirección general de Propiedades, que opinó que debía desestimarse el recurso, confirmándose la resolución apelada por no haber pedido la excepción en el plazo que señala la circular de Enero de 1867; el de la Dirección de lo Contencioso, favorable á la revocación del acuerdo apelado y á la nulidad de la venta, fundada en la ley de 4 de Abril de 1860, que mandó publicar y observar como ley el convenio ante la Santa Sede de 25 de Agosto de 1859, en que se reservan á los Obispos las casas destinadas á habitación de los Párrocos con sus huertos y campos anejos, y, por último, el de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, inspirado en el mismo criterio de la Dirección de Propiedades, de conformidad

con ambos, se dictó la Real Orden de 3 de Agosto de 1883, desestimando el recurso de alzada y confirmando el acuerdo apelado:

Vistas las actuaciones contenciosas, de las que aparece:

Que contra esta Real Orden presentó demanda contenciosa el Licenciado D. Manuel García Prieto, en nombre de D. Niceto Juan y Centeno, para que se declarase la nulidad de la venta de la huerta y pajar pertenecientes á la casa rectoral de Robledo de Valduerna, y declarada procedente la demanda y puesto de manifiesto el expediente al actor para que pudiera ampliarla, se le declaró decaído de este derecho por haber dejado transcurrir con exceso el plazo concedido al efecto:

Que emplazado Mi Fiscal para que contestase la demanda, pidió se absolviese de la misma á la Administración, confirmandose la Real Orden impugnada:

Vista la Ley de 4 de Abril de 1860 mandando publicar y observar como ley del Estado el convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto y ratificado en 7 y 24 de Noviembre del año anterior:

Visto el art. 6.º de este convenio, que dice: «Serán eximidos de la permutación y quedarán en propiedad á la iglesia en cada diócesis los bienes enumerados en el Concordato de 1851, y que también se le reservarán las casas destinadas á la habitación de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo la denominación de *Iglesarios, Mansos y otras*»:

Visto el art. 1.º del Real Decreto de 4 de Enero de 1887, determinando que, bajo el concepto de huerto y campo anejo á las casas rectorales, ya sea conocido con este nombre, ó con el de *Iglesario, manso* ú otro, se considera exceptuada y excluida de la venta, conforme al convenio de 1859, la finca que haya venido disfrutando y poseyendo gratuitamente el Párroco de la parroquia ó de la iglesia:

Visto el art. 4.º del mismo Real decreto, estableciendo que será obstáculo para la conservación de la finca el que estuviera dividida en dos, y señalando, en cuanto á su extensión, de una y media á dos hectáreas, teniendo en cuenta las mediciones del terreno y las especiales de la localidad:

Visto el art. 5.º del mismo Real Decreto, mandando que los Diocesanos y Gobernadores, previo reconocimiento pericial, separarán al punto la finca que debe ser exceptuada, remitiendo sin demora los expedientes al Gobierno para la resolución que proceda:

Vista la circular de 19 de Enero de 1867, dictando reglas para el cumplimiento del Real Decreto de 4 del mismo mes, en cuya

regla 1.^a se manda publicar esta circular en el *Boletín oficial* de cada provincia, invitando á los Párrocos que se crean con derecho al disfrute de huerto ó campo anejo á sus respectivas rectorales á que presenten la oportuna solicitud en el término de sesenta días, mandando en la segunda que, pasado este término, se forme un expediente general de excepción de huertos de cada provincia con el objeto de que, si es posible, se resuelvan todos de una vez:

Considerando que la cuestión de este pleito se reduce á resolver sobre la nulidad de la venta verificada por el Estado de una huerta y pajar pertenecientes á la casa Rectoral de la Iglesia de Robledo de Valduerna, en la provincia de León, cuya nulidad solicitó el Párroco fundándose en la antigua posesión en que dicha iglesia estuvo de las citadas fincas:

Considerando que la Administración activa se negó á acceder á esta nulidad por no haberse solicitado por el Párroco de Robledo de Valduerna la excepción de dichas fincas dentro del plazo marcado por la circular de 19 de Enero de 1867:

Considerando que por el art. 6.^o del convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859, y publicado como Ley del Reino en 4 de Abril de 1860, se reconocen como de propiedad de la iglesia, mandando sean reservadas las casas destinadas á la habitación de los Párrocos con sus huertos y campos anejos, y que el Real Decreto de 4 de Enero de 1867 determina lo que ha de entenderse por éstos, y fija su extensión en una y media ó dos hectáreas:

Considerando que el huerto y pajar reclamados por el Párroco de Robledo de Valduerna caen de lleno dentro de las condiciones de huertos y campos exceptuados con arreglo á las disposiciones que quedan citadas porque pertenecientes por los Párrocos de dicha iglesia, sin contradicción alguna, no exceden además, según resulta del expediente, de la cabida de dos hectáreas que como máximo puedan tener los huertos destinados al usufructo de los Párrocos, y vienen figurando en las relaciones de bienes en la provincia de León, como exceptuados:

Considerando que la circular de 19 de Enero de 1867 no tiene el carácter ni alcance que pretende dársele, pues que dictada para la más fácil ejecución y cumplimiento del Real Decreto de 4 de Enero del mismo año, sus disposiciones se encaminan á favorecer el pronto despacho de los expedientes de excepción, sin que en ninguna de las reglas que comprende se halle la pena de caducidad ó extinción de derechos de aquellos que no acudieron á solicitar la excepción en el plazo que señala:

Considerando que la falta de solicitud de excepción, caso de

existir, nunca sería imputable al Párroco de Robledo, pues que el art. 5.º del Real Decreto de 4 de Enero de 1867 no impone á los Párrocos, sino á los Diocesanos y Gobernadores, la obligación de separar la finca ó fincas que deben ser exceptuadas, y de remitir el expediente al Gobierno para su resolución, y en el pleito actual, esa solicitud de excepción no aparece tampoco como necesaria, porque las fincas de que se trata figuraban en el inventario de las exceptuadas de permutación de bienes eclesiásticos:

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión á que asistieron: D. José Gallostra, Presidente; D. Félix García Gómez, D. Esteban Martínez, D. Angel María Dacarrete, D. Dámaso de Acha, el Marqués de la Fuensanta, D. Enrique de Cisneros, D. José María Valverde, D. Escolástico de la Parra, D. Joaquín Medina y D. Juan Facundo Riaño;

En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. ALFONSO XIII, y como REINA Regente del Reino.

Vengo en dejar sin efecto la Real Orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 3 de Agosto de 1883, y en declarar nula la venta que se ha hecho de la huerta y pajar de que se trata, pertenecientes á la iglesia de Robledo de Valduerna, por hallarse comprendidos dichos bienes entre los exceptuados de venta con arreglo á las disposiciones vigentes.

Dado en San Sebastián á 24 de Agosto de 1888.—MARÍA CRISTINA.—El Presidente del Consejo de Ministros, *Práxedes Mateo Sagasta.*»

Publicación.—Leído y publicado fué el anterior Real Decreto sentencia por el Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo, Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo contencioso-administrativo, celebrando audiencia pública dicho Tribunal en el día de la fecha,

Madrid 8 de Octubre de 1888.—Licenciado Julián González Tamayo.

REAL ORDEN SOBRE JUBILACIONES DE PÁRROCOS

«MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.—Sección 3.ª—Negociado 2.º—Circular.—Ilmo. Sr.: Habiendo notado este Ministerio la frecuencia con que se confunden, en los expedientes de jubilación de Párrocos, las disposiciones legales que deben tenerse presentes al dictar los autos definitivos, según procedan estos de Prelados que hayan realizado ya el arreglo parroquial de su diócesis, ó de los que aún no lo han llevado á efecto; y deseando evitar en lo suce-

sivo dicha confusión, que origina dificultades para la aprobación de los mismos y entorpece su tramitación, que por su índole debe ser rápida y expedita, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se diga á V. I. que el Real decreto concordado de 15 de Febrero de 1867, cuyas prescripciones no son más que las bases que han de tener en cuenta los Diocesanos al formular el plan parroquial, solo puede regir por consiguiente, en las diócesis que han pasado por el mismo, habiéndolo además resuelto en este sentido la Real orden de 6 de Marzo de 1868, dictado con motivo de consulta sobre el particular del R. Obispo de Pamplona. A las disposiciones del citado Decreto deberán, por lo tanto, ajustarse los autos definitivos en las diócesis que han cumplido lo dispuesto en el artículo 24 del Concordato vigente.

»Respecto á los expedientes de Jubilación de Párrocos que procedan de diócesis en las que aún no ha tenido lugar el arreglo parroquial, deberán formarse con sujeción á lo dispuesto en las Reales órdenes de 30 de Abril de 1852 y 13 de Octubre de 1864; y en todos ellos, sea su origen de unas ú otras diócesis de las expresadas, se consignará la categoría y dotación del Párroco solicitante y la cantidad que como pensión se le señale, sin dejar de expresar la parte que le corresponda en los derechos de estola y pie de altar y disfrute de casa rectoral y huerto, si lo hubiere, observándose análogo procedimiento y con igual detalle en cuanto á dotación y derechos que deba gozar, en su caso, el Coadjutor *ad nutum* que se nombre.

»De Real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

»Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1889.—El Subsecretario, *Diego Arias Miranda*.—Al R. Obispo de Calahorra.

APÉNDICE Á LA REAL ÓRDEN ANTERIOR.

He aquí las disposiciones que cita la precedente Real Orden á excepción de la Real Orden de 6 de Marzo de 1868, la cual no se encuentra ni en la *Gaceta oficial* ni en la *Colección legislativa*.

El Real Decreto de 15 de Febrero de 1867 en su parte congruente dice así:

“La pensión que se señale al jubilado en el expediente, que

original ha de remitirse al Ministerio de Gracia y Justicia para obtener mi Real asenso, no podrá exceder, según las circunstancias y servicios del interesado, de la mitad del *máximum* en los curatos de término, de las tres quintas partes en los de ascenso, y de las dos terceras en los demás, urbanos y rurales. El sucesor en el curato disfrutará provisionalmente, mientras subsista la pensión, el término medio señalado á la respectiva clase.»

«Los que á la expedición de la Real cédula auxiliatoria para el arreglo de las parroquias estén ya jubilados con arreglo á la Circular de 13 de Octubre de 1884, continuarán con el uso y disfrute de lo que les esté designado.»

La Real orden de 30 de Abril de 1852 abraza las siguientes nueve reglas:

«Regla 1.^a Los muy reverendos Arzobispos, reverendos Obispos y Vicarios Capitulares, Sede vacante, luego que llegue á su noticia hallarse imposibilitado habitualmente algun párroco de su respectiva diócesis, instruirán sobre ello el oportuno expediente canónico; y resultando bastantemente acreditada la imposibilidad, lo declararán así y elevarán el expediente al Ministerio de mi cargo á los efectos correspondientes, manifestando la necesidad del nombramiento de un coadjutor *ad nutum*.»

«2.^a En estos expedientes designarán los diocesanos la dotación que conceptuen conveniente para los coadjutores con presencia de lo determinado en el párrafo 2.^o, art. 33 del Concordato, y estimando comprendidos á los coadjutores de parroquia rural de segunda clase en lo que sobre dotación de los ecónomos de las mismas se dispone en el artículo 5.^o del R. D. de 29 de Noviembre último.»

«3.^a También determinarán los ordinarios la parte de asignación que los párrocos deban conservar y la correspondiente en los derechos atribuidos á esta clase en el párrafo 4.^o del art. 33 del Concordato.»

«4.^a Para el efecto prescripto en la disposición anterior, deberá considerarse con *máximum* en los curatos urbanos la mitad: en los rurales de primera clase, las dos terceras partes, y en los de segunda, las cuatro quintas partes de la asignación que á la fecha en que se declare la imposibilidad por los diocesanos corresponda respectivamente al curato, y esté disfrutando el párroco imposibilitado, conforme á los arts. 4.^o y 5.^o de la citada circular, ó según el concordato, verificados los casos en aquellos previstos.»

«5.^a Resuelto por S. M. lo que corresponda, ó desde luego, si la urgencia del caso lo requiere, nombrarán los diocesanos el

coadjutor, procurando dar preferencia á los presbíteros exclaustrados en igualdad de circunstancias.»

«6.^a A estas disposiciones se ajustarán y arreglarán para el percibo de sus asignaciones, todos los coadjutores *ad nutum* actualmente nombrados á los párrocos á quienes auxilian.»

«7.^a La pensión que se consigne á los párrocos imposibilitados, se satisfará con cargo á la dotación correspondiente al curato, ingresando en el fondo de reserva la parte de aquella que deje de percibir. La consignación del coadjutor se satisfará con la parte de la renta del curato que ingrese en el fondo de reserva; y si ésta no bastare, se abonará lo que falte por cuenta del imprevisto general del culto y clero.»

«8.^a Disfrutarán además los párrocos propietarios los huertos, casa ó heredades conocidos con el nombre de iglesarios, mansos ú otros que no hayan sido enajenados.»

«9.^a En lo sucesivo no se elevará á la aprobación Real, como hasta aquí, expediente alguno para conceder jubilación á los párrocos, debiendo practicarse únicamente las reglas contenidas en esta circular.»

(4) La de 13 de Octubre de 1864 contiene los tres artículos del tenor siguiente:

«Art. 1.^o Los actuales curas párrocos jubilados y los imposibilitados física y moralmente que hubiesen desempeñado en propiedad curatos de término y de segundo ascenso, disfrutarán en lo sucesivo á contar desde esta fecha las dos terceras partes de sus respectivas dotaciones. Los párrocos de primer ascenso, entrada y rurales de primera y segunda clase, percibirán asimismo las cuatro quintas partes de los sueldos señalados á dichas categorías.»

«Art. 2.^o Además de las dotaciones que se conceden á los párrocos en el artículo anterior, continuarán disfrutando de la parte que los Prelados les hubiesen señalado en los derechos eventuales de estola y pie de altar, y de las casas rectorales, huertos y heredades conocidas con el nombre de iglesarios, mansos ú otros, donde los hubiese, segun está prevenido en la R. O. de 30 Abril de 1852.»

«Art. 3.^o Queda vigente la citada Real Orden en cuanto no se oponga á las anteriores disposiciones.»

CONGRESO CATÓLICO NACIONAL

El Movimiento Católico ha publicado las siguientes con-

clusiones del Congreso Católico que trascribimos con muchísimo gusto.

El Congreso Católico celebrado felizmente en Madrid, y por vez primera en España, ennoblecido en sumo grado con la presidencia reglamentaria del Emmo. Cardenal metropolitano de la provincia eclesiástica de Zaragoza, y con la respectiva dirección superior en las secciones de los muy Reverendos Prelados asistentes, tiene el honor y cumple el deber de dar á la estampa, según procede, el siguiente resúmen de sus instructivas y laboriosas tareas.

1.º El Congreso se propone, primero, y antes que todo, la defensa de la verdad en España, que consiste en el reinado social de Jesucristo. Al efecto, trabajará sin descanso para lograr que restablecida en nuestra patria la unidad católica, que nuestras creencias y costumbres sean informadas del espíritu de la Iglesia y que la justicia sea norma de nuestra legislación y regla inalterable de la vida social.

2.º Como quiera que la pureza de doctrina, la moralidad de las costumbres y el organismo vital de una nación católica depende de la unión íntima y de las relaciones habituales con la piedra fundamental de la Iglesia, el Congreso, justamente preocupado de la situación intolerable en que la Revolución ha colocado á nuestro Santísimo Padre León XIII, se cree en el deber de procurar eficazmente por todos los medios legales, el restablecimiento de la soberanía temporal del Romano Pontífice, que por sagrados títulos de justicia le pertenece, y sin la cual, ni queda garantida su dignidad, su independencia y libertad para el gobierno de la Iglesia universal, ni tampoco amparada la Cátedra Apostólica contra las humillaciones é injusticias que sufre y ha sufrido en sus sagrados derechos, en sus dominios territoriales y en sus preclarísimas instituciones, razón por la cual el Congreso, por voto unánime, juzga y en alta voz proclama que la llamada *cuestión romana*, lejos de ser una cuestión interior de Italia, al contrario, es una cuestión de todo el catolicismo, y reviste un carácter universal que afecta á todos los hijos de la Iglesia diseminados por todo el mundo.

3.º Asimismo el Congreso afirma y sostiene que á la Iglesia pertenece el derecho indiscutible de dirigir é inspeccionar la enseñanza en todos los establecimientos públicos y privados, derecho que es directo, supremo y exclusivo en lo que se refiere á las ciencias religiosas y morales, é indirecto y de intervención en todos los demás ramos del humano saber, para exigir que en ellos no se enseñe cosa alguna contraria al dogma y á la moral

católica, como así se reconoce en el concordato de 1861 y se deduce de la Constitución vigente del Reino.

El Estado, como católico, tiene á su vez el deber de amparar y defender á la Iglesia en el libre ejercicio de su magisterio y enseñanza, y también el derecho y el deber de intervenir en dichos establecimientos docentes para la inspección y tutela de orden público y de la higiene, y para fomentar la instrucción en las ciencias humanas, creando y sosteniendo establecimientos en donde la iniciativa privada resulte deficiente para satisfacer esas necesidades del bien público

5.º El Congreso reputa gravemente perjudicados los derechos de la Iglesia:

En el monopolio y secularización de la enseñanza por el Estado, contra lo que exigen la Religión católica, que es la del reino, y las prescripciones eclesiásticas.

En la supresión de la enseñanza religiosa y moral en los institutos, y en el carácter de asignatura secundaria y accesoria que se dá á la religión en las escuelas normales, donde todavía se conserva su estudio, y cuya influencia provechosa ha de resultar naturalmente menos eficaz, á causa de la escasez del tiempo y menor representación que se conceden al sacerdote que explica materia tan fundamental.

En que no se presta por el Estado á la misma Iglesia el apoyo debido para corregir y remediar los males gravísimos que se infieren á los niños en las escuelas primarias, cuyos maestros se niegan á enseñar la doctrina cristiana, ó enseñan doctrinas heterodoxas, ó con su mal ejemplo y manifestaciones de impiedad é irreligión apartan á la niñez de la fé y de los santos fines á que debe encaminarse la educación.

Y, últimamente quedan perjudicados los susodichos derechos en que la autoridad civil no secunda, como lo requiere nuestra nación católica, las disposiciones de la Iglesia prohibitivas de libros y enseñanzas contrarios al dogma y á la moral, sino que, al contrario, los católicos tienen sobrados motivos para lamentar que en algunos establecimientos docentes se toleren bibliotecas inundadas de libros heterodoxos, y que estos se den como premio á los alumnos con ocasión de los exámenes.

6.º Está fuera de toda duda que los padres de familia tienen el deber y el derecho de instruir y educar á sus hijos en conformidad con las doctrinas de la Iglesia.

De exigir al Gobierno que, por precepto legal y cumplimiento efectivo del mismo, procure que, así en los profesores como en los libros de texto, la enseñanza oficial sea católica, porque ca-

tólicos son los que la remuneran y católico es también el Estado.

De crear y sostener establecimientos libres en que se dé enseñanza católica en todos sus diferentes grados.

De impedir que se funden establecimientos de enseñanza anti-cristiana, neutra, láica ó atea, y de que se les subvencione por el Estado, provincia ó municipio, por ser aquellos contrarios á la religión misma de nuestra patria.

Finalmente: tienen los padres de familia el deber de protestar contra la enseñanza oficial, que no ofrece garantía á su conciencia, y merma y cohibe sus derechos legítimos á fundar establecimientos católicos, libres y completos; contra la tolerancia y subvención de las escuelas neutras y ateas, porque la Constitución vigente, al tolerar los cultos privados disidentes, no autoriza la enseñanza del error y del mal, y contra la imposición á los pueblos de la enseñanza primaria obligatoria, cuando esta no se da de hecho con sanas doctrinas y por maestros que enseñan y cumplen sus deberes como católicos.

7.º En virtud de lo dispuesto en el art. 2.º del Concordato y en el 11 de la Constitución vigente, es justo y procedente reclamar del Estado el reconocimiento de los derechos que nuestra fé santísima tiene en los centros de enseñanza, y por todas maneras exigir de los Gobiernos el respeto á la acción libre y bienhechora de la Iglesia, suplicando una inteligencia y concordia entre ambas potestades para mayor florecimiento y validez académica de los estudios en las escuelas instituidas ó aprobadas por las autoridades eclesiásticas, y trabajando á la vez con perseverantes esfuerzos para lograr que en los institutos sea restablecido, como asignatura oficial, el estudio de la religión y moral, enseñadas por un Sacerdote nombrado ó aprobado á ese fin por el Ordinario.

8.º El Congreso, proclamando que no existen ni pueden existir conflictos entre la Religión y la ciencia, sino que las supuestas contradicciones provienen, ó de dar demasiado valor á la hipótesis, ó de falta de inteligencia de nuestros dogmas, recomienda á los cultivadores de las ciencias naturales el estudio amplio y profundo de los mismos dogmas y de las enseñanzas de la iglesia católica, y consigna su parecer de que los problemas contemporáneos, la misma verdad y progreso de las ciencias naturales y los errores del positivismo materialista y ateo, han demostrado la necesidad de la *ciencia metafísica*, y la de crear, por consiguiente, entre los estudios preparatorios de todas las facultades y escuelas especiales, una cátedra, en la cual se estudien, con la extensión debida, por lo menos la Lógica y Psicología funda-

mentalmente explicadas y al tenor del espíritu de la Encíclica *Æterni Patris*.

9.º El Congreso ha fijado también su atención en nuestros esclarecidos artistas, y á la par que aplaude y hace merecido elogio de sus admirables producciones, prez y gloria de nuestra patria, les invita á que perseveren inspirándose en los grandes sentimientos de la fé, y á que sigan la senda limpia é inmaculada del arte cristiano y español, huyendo siempre del naturalismo y del sensualismo nauseabundos, y levantando con sus prodigiosas obras los ánimos distraídos hácia la contemplación de la belleza y hermosura incomparables del bien infinito, en cuya posesión está cifrada la eterna felicidad del hombre.

10. Para cumplir las resoluciones del Congreso, se ha acordado la creación de una Junta central de Madrid, presidida por el Ordinario y compuesta de miembros que él tenga á bien nombrar. Hasta que el próximo Congreso católico disponga lo que estimare conveniente, ejercerá sus funciones para llenar el fin indicado, y además extenderá su solicitud á preparar y organizar otras obras de celo, de acuerdo con las Juntas diocesanas que los M. Rdos. Prelados establecieren en sus Diócesis respectivas, si así lo juzgaren conveniente, dejando además á la prudente discreción de los mismos el designar persona de su confianza que en esta corte se entienda con la Junta Central de la misma, siempre que fuere necesario.

11. La existencia de esas Juntas, encaminadas á establecer una organización católica en toda España, exige un medio de publicidad que sea eco fiel de las mismas y del desenvolvimiento de su vitalidad, y por eso el Congreso ha estimado necesaria y de importantísima utilidad la publicación de un diario católico, que, manteniéndose neutral en las diferencias que pueda haber entre los demás diarios católicos que revisten carácter político, se consagre exclusivamente al servicio de la Iglesia y á la defensa de sus derechos, teniendo siempre en cuenta, para cumplirlos fielmente, los repetidos y saludables avisos dados por Su Santidad para el mejor éxito de la prensa cristiana.

12. Reconociendo el Congreso que, merced á la caridad de las almas buenas, existen por todas partes, en mayor ó menor esplendor, escuelas gratuitas para niños, escuelas dominicales para sirvientes, protectorados de industriales jóvenes, cajas de ahorros, bibliotecas y talleres católicos á que con sus personas y recursos vengán en apoyo de esas obras de la mayor importancia, á fin de mantenerlas florecientes donde ya se hallen establecidas y de crearlas donde todavía no existieren.

13. El Congreso suplica á los dueños de fábricas y otros centros de obreros imiten el ejemplo de los escelentes dueños católicos, que levantan capillas, abren escuelas catequistas y procuran santas misiones para sus dependientes; y á todos insta con encarecimiento para que cada uno se esfuere por ver desterrada de nuestra patria la blasfemia, pidiendo se aplique oportunamente la sanción del Código penal.

14. El Congreso procurará, por todos los medios posibles, alcanzar de nuestros gobernantes que dispongan sancion penal contra los profanadores de los dias santos y festivos, y ruega á todos los católicos, que en las obras, fábricas y comercios que abrieren, no se trabaje en dichos dias, destinados al justo y natural descanso, y á unos y á otros que repriman el desenfreno de la prensa impía, y la circulación de páginas y estampas inverecundas.

15. Sobrios son, gracias á Dios los españoles; mas es menester algun desvelo, mayormente de las autoridades, á fin de que sea castigado el abuso de las bebidas, de que los establecimientos de ellas se cierren á hora oportuna de la noche, de que se persigan eficazmente los juegos prohibidos, y de que se adopten prudentes medidas para desterrar los espectáculos y canciones inmorales.

16 El Congreso se asocia incondicionalmente á los propósitos caritativos que abriga nuestro Santísimo Padre León XIII por la extirpación de la esclavitud, principalmente en el continente africano, y espera que España responda con su generosidad tradicional á secundar los desvelos y laudable celo del esclarecido Cardenal Lavigerie en favor de tan insigne obra cristiana.

Ha fijado asimismo su atención el Congreso en la triste condicion á que se ven reducidos los españoles que emigran á otros países en busca de medios de subsistencia, y á la vez que se ha propuesto estudiar la manera de impedir la emigración, en cuanto sea posible, tratará de establecer en nuestra patria la Asociación de San Rafael, para amparar y socorrer á nuestros compatriotas é impedir que por causa de la miseria sean explotados por cruel avaricia y expuestos á la apostasía y á la corrupción en suelo extranjero.

17. Como recuerdo de la fé y unión de los católicos en el Congreso, acuerda éste dar á la estampa los discursos leídos en las sesiones públicas, y las memorias ó discursos especialmente recomendados para su publicación por las distintas Secciones. Y como voto de agradecimiento, además, á la inteligencia y actividad de las Secciones respectivas, determina hacer públicas sus conclusiones aceptadas en las sesiones generales.

Dando, finalmente, gracias al cielo y á nuestro Santísimo Padre León XIII por las bendiciones con que han favorecido al primer Congreso Católico de España, se da éste por terminado, y se designa el año próximo venidero para el segundo Congreso nacional, á la sombra augusta del Pilar de Zaragoza.

Madrid 8 de Mayo de 1889.—Por orden del Emmo. señor Cardenal Presidente, DR. ENRIQUE ALMARAZ, *Secretario.*»

CONCLUSIONES

ACEPTADAS POR EL CONGRESO CATÓLICO

en las sesiones generales, no públicas, de los días 2 y 3 del mes de Mayo.

SECCIÓN PRIMERA.

Puntos I y II.

Dadas las condiciones de la vida moderna, señalar los medios que se estimen más eficaces para reanimar y sostener la fé católica en los pueblos.

Exponer cuáles son las Cofradías, Congregaciones y Hermandades que sean más idóneas en nuestros días para aumentar la piedad y frecuencia de Sacramentos de las clases populares, é indicar los medios de propagar aquéllas.

1.^a Los miembros todos del Congreso, despreciando los humanos respetos, procurarán fomentar ó restablecer, donde sea necesario, las saludables prácticas de oír diariamente la santa Misa, siempre que sea posible; de rezar privadamente, en familia ó en público, por la mañana, al medio día y al anochecer, las *Ave Marías*, tan recomendadas por la Iglesia, y por la noche, en familia, el santísimo Rosario.

2.^a Se dedicarán con empeño á desterrar de entre sus conocidos y amigos, en cuanto esté á su alcance de sus pueblos, el abominable vicio de la blasfemia, los espectáculos inmorales, las malas lecturas y las pinturas pornográficas; y á difundir, en cambio, con profusión el Catecismo de la doctrina cristiana y las publicaciones de sanas y amenas enseñanzas.

3.^a La Sección entiende que las Cofradías, Congregaciones y Hermandades más idóneas en nuestros días para aumentar la piedad y frecuencia de Sacramentos, son aquellas cuyos estatutos prescriben la oración frecuente, la confesión y comunión varias veces en el año, el mutuo auxilio para alcanzar una buena